

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

AUTO

Con el fin de llevar la representación de la parte accionada Colpensiones, se le reconoce personería a la doctora Francy Lorena Pérez portadora de la Tarjeta Profesional número 198.215 del CSJ., en los términos de la documentación allegada para el efecto.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 005001310502020180007401, promovido por el señor **DARÍO DE JESÚS DIOSA MUÑOZ**, en contra de **COLPENSIONES, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE**

INVALIDEZ con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto, en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, y conocer en consulta al ser una sentencia totalmente adversa a los intereses de una entidad de la cual, la Nación de acuerdo al artículo 69 del CST.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **376**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El señor Diosa Muñoz interpuso acción judicial solicitando se declare la nulidad de los dictámenes emitidos por las entidades, esto es Colpensiones, Junta Regional de Calificación de Invalidez y Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y por tanto, se declare que cuenta con una pérdida de capacidad laboral del 72.3% estructurada el 18 de enero del año 2017 en los términos indicados por el dictamen realizado de forma particular, y por tanto se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez desde el 18 de enero del año 2017, con los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, costas del proceso y de manera subsidiaria la indexación.

Como fundamento fáctico de lo pretendido, expuso que, nació el 23 de febrero del año 1944 y se afilió a Colpensiones desde el año 1995, por lo que el 4 de octubre del año 2016 solicitó ser calificado en su pérdida de capacidad laboral, encontrando un resultado del 40% estructurado el 17 de septiembre del año 2016, dictamen que, fue apelado ante la Junta Regional quien estableció que el demandante con la misma fecha de estructuración contaba con una pérdida de capacidad laboral del 42.32%, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 42.33%. Expuso, que de manera particular solicitó ser revisado por la IPS de la Universidad de Antioquia quien otorgó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 72.345, por ende, que los dictámenes dados con antelación no valoraron de manera adecuada sus patologías.

Notificada la demanda, las accionadas dieron respuesta al libelo gestor así:

Colpensiones, se opuso a la prosperidad de las pretensiones del demandante, e interpuso las excepciones de “Inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de invalidez en los términos establecidos en la demanda”, “No procedencia del reconocimiento de los intereses moratorios”, “Cobro de lo no debido”, “Prescripción”.

La Junta Regional de Calificación de Invalidez, solicito se despachen de manera desfavorable lo peticionado por el actor, excepcionando para ello: “Inexistencia de fundamentos de hecho y derecho de las pretensiones”.

Por su parte, la Junta Nacional de Calificación no dio respuesta al escrito de demanda.

En sentencia proferida el 12 de marzo del año 2020, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, resolvió desestimar los dictámenes emitidos por Colpensiones, Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Condenó a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez desde el 18 de enero del año 2017, sobre el salario mínimo legal mensual vigente, cuantificando un retroactivo hasta el mes de marzo del año 2020 en suma de \$32.727.389, y ordenó el pago de la prestación desde el 1 de abril del año 2020 a cargo de Colpensiones, a futuro mientras subsistan las causas que le dieron origen. Absolvió de los intereses de mora, condenó a la indexación de las condenas, y condenó en costas a Colpensiones y a favor de la parte actora.

APELACIÓN

El apoderado de la parte accionada Colpensiones interpuso su recurso de alzada frente al retroactivo pensional, pues si bien se concede la prestación desde el 18 de enero del año 2017, la historia laboral del demandante tiene cotizaciones hasta el mes de diciembre del año 2017, por lo que, solicita que el retroactivo debe concederse desde dicho momento, pues además el dictamen fue expedido desde el 30 de noviembre de 2017, en tal sentido, peticiona sea reconsiderada la fecha de reconocimiento pensional.

ALEGATOS

El procurador judicial de la parte actora, expuso en sus alegaciones que el dictamen realizado por la parte debe ser tenido en cuenta por su apego al Decreto 1507 de 2014 y a la historia clínica, pues se atiene también al concepto

desfavorable de recuperación que obra en el expediente del 18 de enero del año 2017, donde la se tienen definido secuelas permanentes debido a la gravedad, con prueba hipoacusia soportada en prueba objetiva. Recordó que el perito explicó que incluso si se tiene en cuenta las deficiencias calificadas por la Junta Regional y Junta Nacional, pero realizamos la calificación del rol ocupacional, para una persona adulta mayor no activa laboralmente, hay una deficiencia ponderada del 19.52%, más otras áreas ocupacionales 35%, que concluiría en una PCL Superior al 50%, por tanto, solicita sea confirmada la sentencia.

Colpensiones, por su parte, hizo un recuento de los dictámenes, y explicó que de acuerdo al artículo 41 de la Ley 100 de 1993 es la experticia de las Juntas la que debe tenerse en cuenta para determinar el estado de invalidez, y que, para la controversia de los mismos, debe seguirse el trámite previsto en el artículo 44 del Decreto 1352 de 2013. Expuso, que al demandante el 31 de mayo del año 2014 con radicado 2014_2524143 petitionó indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, sin que dichas sumas se encuentren reintegradas, lo cual, la hace incompatible con el derecho pretendido. Solicitó, por ende, la absolución de Colpensiones.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta instancia, consiste en determinar, si hay mérito alguno para declarar la nulidad de las valoraciones médicas realizadas al actor por Colpensiones, Junta Regional de Calificación de Invalidez y Junta Nacional, de ser así, cuál es el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del actor y si reúne la densidad de semanas necesarias para acceder a la pensión de invalidez, desde cuándo.

CONSIDERACIONES

Preliminarmente ha de indicarse, que la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia tiene definido que los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos no son medios probatorios solemnes, y por ende el Juzgador en su valoración, no está sometido a la tarifa legal de pruebas y puede formar libremente su convencimiento con aquellos elementos que le den mayor credibilidad o lo persuadan más, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Adicionalmente, ha referido que como tales dictámenes no obligan al Juez; dentro del marco de esa libertad probatoria, éste puede acudir a otros medios idóneos para establecer la fecha de estructuración de la invalidez, porque no en todos los casos ésta puede inferirse con certeza (sentencias SL 16.374 de 4 de noviembre de 2015, Radicado 53.986; SL 2496 de 2018; SL 697 de 2019; y SL 3117 de 5 de agosto de 2019, Radicado 73.341).

Igualmente quedó claro por la Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que, tratándose de la fecha de estructuración, los jueces podrán entrar a modificar la establecida, siempre que encuentren medios técnicos de prueba que indiquen lo contrario. Sentencia de la SL CSJ, de oct. 19 de 2006, rad. 29622, MP Carlos Isaac Nader, donde se indicó:

“Ciertamente, la Corte ha estimado que en la actualidad el estado de invalidez de un trabajador corresponde establecerse mediante la valoración científica de las juntas de Calificación, a través del procedimiento señalado en los reglamentos dictados por el Gobierno

Nacional. Pero la Sala de Casación Laboral no ha sostenido que los parámetros señalados en el dictamen de la Junta sean intocables. La regla sentada en el fallo citado por el recurrente como apoyo de su criterio es que, en principio, la declaración del estado de invalidez es materia de expertos y no corresponde, en los actuales momentos, a la entidad de seguridad social, como ocurría antes, sino a unos entes autónomos, como son las juntas Regionales en primera instancia, y la Nacional en último grado.

De ninguna manera ha considerado la Corte que los hechos relativos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre el hecho genitor de la minusvalía, tenidos en cuenta por uno de tales entes, o por ambos si se agotan las dos instancias, sean materia incontrovertible ante la jurisdicción del trabajo. Por el contrario, en reciente sentencia del 13 de septiembre 2006 (rad. 29328), tuvo esta Sala de Casación oportunidad de referirse al tema, en los siguientes términos:

“Por otra parte, la circunstancia de que la Junta Nacional actúe como órgano de segunda instancia para resolver las reclamaciones formuladas por los interesados contra las evaluaciones de las juntas regionales, no necesariamente su concepto obliga al juez. De no ser así, ciertamente carecería de sentido la intervención de la jurisdicción laboral simplemente para dar un aval al pronunciamiento de un ente que, tal cual lo reconoce la censura, no tiene la potestad del Estado para “decidir” el derecho. Sólo el juez puede, con la fuerza que imprime a sus decisiones el instituto de la cosa juzgada, definir si hay lugar a establecer el estado de invalidez o los parámetros en que debe reconocerse la pensión objeto de controversia y, para tal propósito, nada le impide acudir al apoyo de un ente especializado en la materia y que cumple funciones públicas, así sus miembros no sean servidores del Estado, en virtud del moderno esquema de administración descentralizada por colaboración.

Cuando en casos como en el que ocupó a la Sala en esa oportunidad, se planteó una manifiesta contradicción de la valoración médica sobre el nivel de la incapacidad entre las juntas de calificación que intervinieron para tal efecto, la Corte no tuvo duda sobre el carácter discutible del punto y la plena competencia de los jueces para establecer, también por medios técnico-científicos el verdadero grado de invalidez del afectado. Con mucha más razón cuando se trata del señalamiento de la fecha en que se estructura la invalidez, porque no en todos los casos se podrá inferir tal data de una prueba infalible e incontrastable y, por lo mismo, incontrovertible, como sería lo ideal. Para la muestra un botón: En el sub examine, el Tribunal consideró contraevidente e ilógico que una persona haya laborado durante varios años ejerciendo actividades de vendedor y la Junta de Calificación de Invalidez desconozca esa realidad, dejando de lado el material probatorio que tuvo a su disposición y sin que ameritara un pronunciamiento al respecto, y se dictamine que la invalidez se produjo en la infancia temprana, muchísimos años antes del despliegue de una vida laboral, esa sí demostrada fehacientemente.”

Acorde con al artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el estado de invalidez se determina con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación, y corresponde al Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP, hoy Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, a las Compañías de Seguros que asumen los riesgos de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar inicialmente la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias, pero cuando el interesado no está de acuerdo y manifiesta su inconformidad, la entidad debe remitirlo a la Junta de Calificación de Invalidez del orden Regional para que dirima la discrepancia. La decisión de ésta es apelable

ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y contra ellas proceden las acciones legales.

Conforme el párrafo 2 del artículo 4 del Decreto 1352 de 2013, la nulidad de los dictámenes de calificación de invalidez puede demandarse ante la jurisdicción ordinaria.

“..PARÁGRAFO 2°. Cuando un dictamen de la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, sea demandado ante la Justicia Laboral Ordinaria se demandará a la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez como organismo del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, y al correspondiente dictamen...”

Respecto al dictamen como elemento probatorio, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia expuso en sentencia SL 3992-2019 reiterada en SL 509-2022 lo siguiente:

“Sin embargo, al mismo tiempo, por la diversidad de factores que confluyen a la determinación de la realidad de la salud del paciente y la evolución de su capacidad laboral, la Sala ha determinado que dichos dictámenes no constituyen una prueba definitiva, incuestionable o inmodificable en el marco del proceso ordinario, ni muchos menos una prueba de carácter ad substantiam actus. Contrario a ello, ha destacado esta corporación, en múltiples oportunidades, que dichas experticias constituyen una prueba más del proceso que el Juez puede valorar de manera libre, dentro del marco de sus facultades de libre valoración de la prueba y libre formación del convencimiento. (Ver CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062, CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, CSJ SL3090-2014, CSJ SL9184-2016, CSJ SL697-2019 y CSJ SL3380-2019).

En dicha medida, no es cierto que, como lo reivindica la censura, la calificación del estado de invalidez constituya una cuestión técnica ajena al conocimiento de los jueces, pues, por el contrario, es precisamente el Juez del trabajo el que tiene el poder jurisdiccional para establecer el estado de invalidez y todas sus variables asociadas, esto es, entre otras, el origen de la enfermedad o accidente, la fecha de estructuración y el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Para esos fines, a su vez, el Juez cuenta con amplias potestades probatorias y de reconstrucción de la verdad real del proceso, de manera tal que puede darle credibilidad plena al dictamen o someterlo a un examen crítico integral o de alguno de sus elementos, hasta el punto de apartarse legítimamente de sus valoraciones y conclusiones.

Específicamente, en tratándose de la valoración de la pérdida de la capacidad laboral de los afiliados al sistema de seguridad social y de la fecha de estructuración de tal evento, la Corte ha sostenido que los dictámenes de las juntas de calificación, a pesar de su importancia, no representan conceptos definitivos e inmutables, sino pruebas del proceso que bien pueden ser revaluadas o desvirtuadas por el Juez del trabajo, en ejercicio de sus libertades de valoración probatoria.”

Es imperativo que, se recuerde el criterio que recientemente expuso la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencia SL 2349 de 2021:

“Al definir un asunto en el que se opongan diferentes conceptos científicos sobre el estado de salud de una persona, los jueces pueden soportar su decisión en el que les ofrezca mayor credibilidad y poder de convicción.

Sobre este particular, en la sentencia CSJ SL-4346-2020 la Sala Laboral asentó:

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el estado de invalidez se determina, en primera oportunidad, por las entidades de seguridad social y las juntas de calificación de invalidez, conforme al manual único para la calificación vigente al momento de su práctica - decretos 917 de 1999 o 1507 de 2014, según el caso (...). Aunque la Corte ha admitido la relevancia de los dictámenes que expiden las juntas de calificación de invalidez por tratarse de conceptos técnicos y científicos emanados de órganos autorizados por el legislador, lo cierto es que estos constituyen un medio de prueba y, como tal, deben someterse a la valoración del juzgador bajo los principios de libre formación del convencimiento y apreciación crítica y conjunta de la prueba, previstos en los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062, CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, CSJ SL3090-2014, CSJ SL9184-2016, CSJ SL697- 2019, CSJ SL3380-2019, CSJ SL 3992-2019 y CSJ SL5601-2019).

En esa medida, el juez no puede simplemente ignorar las circunstancias que rodean el caso, la conducta procesal y los demás elementos probatorios adosados, pues todos, en conjunto, permiten determinar el momento en el que se produce, de manera definitiva, la disminución de la capacidad laboral de la persona”.

Es así como este juez plural debe dar estudio a toda la prueba recaudada así:

Colpensiones, efectuó el 4 de octubre del año 2016 calificación de pérdida de capacidad laboral del actor, encontrando lo siguiente:

Pérdida de capacidad laboral: 40%

Fecha de estructuración: 17 de septiembre del año 2016.

Sustentación: *PACIENTE CON DOLOR CRÓNICO SACROCOXEGEO CON COXIGODINIA RESIDUAL DE DIFÍCIL MANEJO, REFRACTARIA AL TRATAMIENTO CON BLOQUEOS Y CON*

FÁRMACOS, SU DOLOR CRÓNICO ES FARMACOREFRACTARIO + HTA EN MANEJO EN PROGRAMA, NO DM, EN MANEJO CON LOSARTAN + ASA+ HIDROCLOROTIAZINA + DOZAXOCINA +CX DE RECONSTRUCCIÓN COLGAJOS POR MORDEDURA DE TIBURÓN + ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO III CON TFG DE 59 CC/ MINUTO Y MICROHEMATURIA SEGÚN HISTORIA DE NEFROLOGÍA DEL 24/08/2014 CREATININA DE 1.13 MG/DL CON GLÁNDULA PROSTÁTICA AUMENTADA DE TAMAÑO POR ECOGRAFÍA URINARIA DEL 24/08/2016. SE ESTRUCTURA AL 17/09/2016.

SE RECOMIENDA:

VALORACIÓN MULTIAXIAL Y MANEJO POR PSIQUIATRÍA+ VALORACIÓN POR OFTALMOLOGÍA CON AV CC OD, OI, Y DEFINIR DX, PLAN DE MANEJO AV CC+ CAMPOS VISUALES 30-60-2 CON ESTÍMULO 1114 Y

CON TODO LO ANTERIOR REVISIÓN DE LA PÉRDIDA AQUÍ DECLARADA.

La fecha de valoración del examen físico del paciente fue efectuada el **17/09/2016**, y fue precisamente ese límite temporal el planteado por Colpensiones como la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, sin embargo, llama la atención poderosamente a la Sala, que el médico que realiza la experticia encuentra el cuadro depresivo claro, más considera no se encuentra determinado aún por psiquiatría, ordenando su valoración por dicha especialidad, para luego, se calificó nuevamente, y sumado a ello, dejó plasmado las siguientes exposiciones del paciente:

Necesita ayuda para bañarse, “ME SECAN”.

Necesita ayuda para vestirse, “ME PONEN LA ROPA”

Ahora, para el momento en que fue efectuada esta calificación, el actor aún se encontraba prestando servicios como taxista, motivo por el cual, se realizó la calificación sobre el Rol laboral, bajo en entendido, que continuaba económicamente activo, pues así se lo expresó el señor Diosa Muñoz al calificador, y las conclusiones a las que se llegan por parte Colpensiones, tienen directo apego a la historia clínica existente para ese momento, siendo como hechos determinantes las siguientes deficiencias:

Dolor crónico intratable.

Insuficiencia renal crónica, no especificada.

Hipertensión esencial.

Trastornos de próstata en enfermedades no tratadas en otra parte

Trastornos sacrogeicos no especificado en otra parte.

Empero, se reprocha que no se tuviera en cuenta valoración de tipo psiquiátrico, pues para dicho momento el demandante pese a haber sufrido varias alteraciones del humor, no tenía (de lo que se aporta en el expediente) un concepto de rehabilitación, y parece, no quedó más remedio para el calificador, que instarle a iniciar las valoraciones médicas pertinentes.

Sin embargo, para el 8/10/2016 (fecha posterior a la valoración médica), se observa la nota de historia clínica “*paciente con depresión, quiere hablar, llora con facilidad... se remite a spiquiatría*” y el 7 de noviembre de 2016 diagnóstico anterior: “*trastorno afectivo bipolar depresivo grave presente*”.

Estas notas de historia clínica, que claramente son posteriores, dan rastros cómo el demandante de manera previa **contaba con una situación de desmejora** en

su estado de salud mental, que debió, sin duda tener en cuenta en calificador. Y cobra especial relevancia este tema, pues el Decreto 1507 del año 2014, respecto a ello, determina que, los trastornos del estado de ánimo más graves se definen por la presencia de episodios de depresión (trastorno depresivo) y de exaltación (manía o hipomanía), o la presencia de ambos tipos de episodios (trastorno bipolar del estado de ánimo). El trastorno depresivo mayor se caracteriza por la presencia de un episodio único o la presencia de episodios depresivos recurrentes, mientras que el trastorno bipolar del estado de ánimo se caracteriza por la presencia de episodios maníacos que alternan con episodios depresivos. Y aclara también que, la recurrencia se produce después de un período de remisión de dos meses entre los episodios o el cambio de polaridad de estos, por lo que, al demandante haber sido diagnosticado con el trastorno bipolar para el mes de noviembre del año 2016, sin duda, antecedían manifestaciones claras de la enfermedad que no debieron pasarse por alto en la calificación, pues el manual, da la posibilidad de evaluar, en mayor o menor medida la forma en que se han dado los episodios, así:

Clase	Trastornos psicóticos	Trastornos del humor	% Deficiencia
Clase I	Antecedente de por lo menos un episodio psicótico con una duración mayor de un mes. y Hallazgo actual: insomnio, labilidad emocional, inquietud y otros síntomas inespecíficos.	Antecedente de episodios mayores del humor en remisión completa. y Hallazgo actual: presencia de algunos síntomas menores del humor.	20%
Clase II	Antecedente de episodios psicóticos y/o episodio actual hasta de seis meses incluyendo el periodo intercrítico. y Hallazgo actual: ausencia de síntomas negativos. No clara conciencia de enfermedad y tendencia a pérdida de juicio de la realidad.	Antecedentes de episodios mayores del humor. Remisión parcial de los episodios mayores del humor. y Hallazgo actual: En la fase de remisión persisten algunos síntomas que no configuran el cuadro clínico completo o la intensidad de los mismos ha disminuido, o se ha instaurado un estado menor del humor.	40%
Clase III	Antecedente o no de episodios psicóticos previos. Tiempo de duración del episodio actual (o estado persistente) mayor a 6 meses, incluyendo fase con síntomas residuales o prodrómicos. y Hallazgo actual: Presencia de ideas delirantes de uno u otro tipo que producen deterioro en la actividad o funcionamiento mental.	El episodio depresivo mayor dura más de dos años. y Hallazgo actual: Persistencia del cuadro clínico característico de un episodio mayor del humor en cualquiera de los diferentes niveles de gravedad. Existe algún grado de deterioro en la actividad o funcionamiento	60%
Clase IV	Tiempo de duración del estado persistente mayor a 6 meses (sin incluir fase prodrómica y residual). y Hallazgo actual: ideas delirantes sistematizadas y presencia de síntomas negativos. Deterioro de la actividad o funcionamiento mental.		80%
Clase V	Tiempo de duración del estado persistente mayor a 6 meses. y Hallazgo actual: predominio de síntomas negativos y desorganización de la actividad consciente y voluntaria. Es decir gran compromiso en la actividad o funcionamiento mental.		100%

Ante la inconformidad de la parte accionante fue valorado nuevamente el actor, esta vez, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, quien el 17/02/2017 expidió la valoración numero 64112 bajo las deficiencias:

Trastorno depresivo reactivo de 2 meses de evolución y tratamiento.

Hipertensión arterial clase I.

Coxigodinia post, fractura lineal no desplazada de coxis

Cicatrices corporales

Nótese, como el calificador si tuvo en cuenta el estado de ánimo del paciente para determinar la merma de capacidad laboral, pero ello, apegándose a un ingreso reciente de psiquiatría. Y es que, se insiste, de las breves notas de historia clínica que anteceden a dicha fecha si se puede colegir un cambio ostensible en la calidad de vida del trabajador. Para este dictamen, se tuvo en cuenta al trabajador dentro del rol laboral como económicamente activo, pues informó su calidad de taxista, pero se modificó la calificación total arrojando una pérdida

de capacidad laboral del 42.32% estructurada el mismo 17 de septiembre del año 2016 dado por Colpensiones, fundamentado en lo siguiente: *“El 8/11/2016 consultó por primera vez a psiquiatría, conceptúa que presenta trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente, sin síntomas psicóticos, ordenándole sertralina y trazodona, el 18/01/17 psiquiatría señala, que el paciente refiere que hace 1.6 años sufrió fractura de coxis se queja de dolor fuerte e intenso, no resiste posición sentado y acostado, a partir de la fecha se encerró, no habla, miedo a salir a trabajar, conceptuando trastorno depresivo recurrente grave secundaria al trauma y sus secuelas (limitación de la movilidad y del funcionamiento) ha recibido tratamiento psiquiátrico con respuesta variable, pronóstico reservado para reintegro laboral.”*

Sin embargo, dejó de lado el calificador, que en el concepto médico dado por psiquiatría de Colpensiones el 18 de enero del año 2017 también se calificó al actor con pronóstico **NO FAVORABLE** de recuperación, y se dejó constancia que su estado de salud era consecuente a una evolución de por lo menos 1.5 años de evolución.

Por su parte la Junta Nacional de Calificación el 25 de octubre 2017, delimitó las deficiencias así:

Deficiencia por enfermedad cardiovascular hipertensiva

Deficiencias por alteraciones de la piel y faneras

Deficiencias por disestesia secundaria a neuropatía periférica o lesión de médula espinal y dolor crónico somático

Deficiencia por trastornos del humor.

Estimó en la calificación que el trabajador se encontraba aún dentro del rol laboral, o no ocupacional, y otorgó una pérdida de capacidad laboral del 42.33% estructurada el 17/09/2016.

Al igual que la valoración dada por la Junta Regional, no se toma el concepto no favorable de rehabilitación, situación, de la cual, se aparta la Sala.

De la historia clínica aportada por la parte actora, es claro, que el concepto de no rehabilitación por psiquiatría del demandante, fue de una contundencia tal, que después de dicho momento y tan sólo para el 6/10/2017 se denota un cambio ostensiblemente negativo, pues la Psiquiatra, médica Julia Rodríguez expuso:

“Paciente de 73 años de edad con quien ha tenido mejoría poco significativa de cuadro depresivo a pesar de manejo instaurado, con persistencia de alteración de patrón del sueño en contexto de cuadro doloroso crónico... al momento de la anamnesis impresionan fallas cognitivas que pueden estar relacionadas con depresión, psiquiatría sugirió en cita anterior que una vez mejorado el cuadro clínico evaluar si persiste esa falla cognoscitiva”

La historia clínica del paciente respecto a su estado mental, continúa, sin mejoría alguna, por el contrario, definiendo incluso la aportada en 2019 episodios maníacos.

La IPS UNIVERSITARIA, el 30/11/2017 a solicitud del demandante, valoró su estado de salud, y tuvo en cuenta los siguientes diagnósticos, todos coherentes con la historia clínica:

Dolor crónico intratable.

Fractura del sacro.

Hiperplasia de la próstata

Hipertensión esencial.

Hipoacusia neurosensorial

Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos.

Y respecto a las deficiencias si informó:

Deficiencia por enfermedad cardiovascular hipertensiva

Deficiencia por pérdida de la agudeza auditiva

Deficiencia por la disestesia secundaria a neuropatía periférica o lesión de médula espinal y dolor crónico somático

Deficiencia por trastornos del humor

Tuvo en cuenta al demandante dentro del rol ocupacional y no laboral, otorgándole un porcentaje de 35 puntos, y estableció una pérdida de capacidad laboral del 72.3% estructurada el 18/01/2017.

Explicó que perito en la sustentación a su dictamen el doctor José William Vargas Arenas:

Es un paciente que para el momento de la calificación ya estaba en la 8va década de su vida, con una historia laboral de latonería y conductor de taxi. No laboraba para el momento del dictamen, sino que dependía de su esposa, aclara que tenía una fractura de coxis con muy mala mejoría y respuesta al tratamiento, con dolor severo, por lo que se desarrolla un cuadro de diagnóstico depresivo grave y el estado depresivo lo llevó a un compromiso de alteraciones en la memoria, donde se aconsejó que se hiciera una valoración neuropsicológica. Explicó que, en el dictamen, si bien no se hace un traslado textual de la historia clínica si explicó las notas más importantes dejando acotación de los trastornos mentales. Respecto al concepto de rehabilitación, consideró que la glosa del 18 de enero del año 2017 es suficiente para determinar la pérdida de capacidad laboral del actor, pues allí se hace un diagnóstico depresivo grave y se da una respuesta variable, es decir, que puede dar recuperación o no, por lo que se puso pronóstico reservado para

reintegro laboral, más aún por su edad. Argumentó, que en Samein, también se dejó claro en la H.C. que es un paciente con cuadro de síntomas depresivos en contexto de cuadro doloroso crónico sin adecuada respuesta, a pesar de dosis máxima de Sertralina. Respecto a la evolución, narró que no todos los pacientes llegan a este extremo con una fractura que les impide laborar, pero que el demandante, para el 2 de octubre del año 2017 contaba ya con dolor crónico, refractario al tratamiento que requiere valoración por depresión. Sustentó que aplicó el valor otorgado a la tabla 13.2 por episodio depresivo mayor, porque ha durado más de dos años y reafirmó que al ser adulto mayor se encuentra en el rol ocupacional. A título académico, indicó que incluso, efectuándose la calificación del actor dentro del Rol laboral y no ocupacional, ante la imposibilidad de ejercer la función para la cual cuenta conocimiento, tendría una pérdida de capacidad laboral muy superior al 50%, ejercicio, que la *a quo*, le instó a realizar en audiencia, dando en efecto tal resultado.

Observa la Sala que el dictamen efectuado por el doctor Vargas Arenas es acertado y coherente con la historia clínica del paciente, sin embargo, se resalta que para la fecha del dictamen el trabajador se encontraba cesante temporalmente, es decir, era laboralmente activo, por lo tanto, se encontraba en rol laboral y no ocupacional como lo indicó el perito, pues nótese como continuaba cotizando bajo la empresa METROMÓVIL, por lo que, pese a su edad, debía calificarse bajo el rol laboral, pues el Manual Único de Calificación Decreto 1507 de 2014 expone al respecto (TITULO II CAPITULO 1):

‘Las personas en edad económicamente activa, son las que cuentan con un rol laboral y el grupo de los bebés, niños, adolescentes y adultos mayores (que no trabajan) tienen un rol

ocupacional de juego, estudio (vida escolar) y uso del tiempo libre o de esparcimiento, respectivamente.

...

2.1. Rol laboral: Se refiere a cómo llevar a cabo las tareas y acciones necesarias para ejecutar las actividades de un trabajo o empleo. Lo anterior de acuerdo con las actitudes y aptitudes de orden psico-cognitivo y físico de las personas, desarrolladas y acumuladas por los aprendizajes, los conocimientos, las destrezas, y las habilidades operativas, organizativas, estratégicas y resolutivas que se ponen en juego como capacidad productiva. Esta capacidad productiva se define y se mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral.”

Pese a este punto de disenso de la Sala, la conclusión del dictamen, sigue siendo la misma, pues teniendo en cuenta que el actor se desempeñó en su vida laboral, como latonero y como taxista, al no poder estar en postura de sentado durante mucho tiempo por el dolor crónico padecido con la fractura, la depresión grave y el deterioro cognitivo, agravado con la última patología referenciada en historia clínica por el calificador último, y de la que hay rastros en historia clínica por prueba diagnóstica de hipoacusia neurosensorial bilateral, no hay duda, que el 18 de enero del año 2017, marcó el momento de no recuperación del trabajador, con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, pues la tabla respectiva otorga un porcentaje de 25 puntos, así:

Tabla 1:

Tiempo de ejecución: Limitación total para cualquier tipo de jornada laboral.

Forma de integración laboral: No existe, la persona permanece en casa o en una institución de cuidado especial. 25 puntos.

Conforme a lo anterior, basta para atenerse a la sentencia SL 494 de 2021 que

indica: *“el calificador debe fundamentarse en las consideraciones de orden fáctico sobre la situación que es objeto de evaluación, donde se relacionan los hechos ocurridos que dieron lugar al accidente, la enfermedad o la muerte, indicando las circunstancias de modo, tiempo y lugar dentro de las cuales sucedieron; y el DIAGNÓSTICO CLÍNICO de carácter técnico-científico, soportado en la historia clínica”* para concluir, que el demandante cuenta con una pérdida de capacidad laboral estructurada el 18 de enero del año 2017 y en un porcentaje del 72.34%.

Corolario a ello, le asistió razón a la *a quo*, al dejar sin efecto las calificaciones realizadas por Colpensiones dictamen 2016180239W, Junta Regional de Calificación de Invalidez y Junta Nacional de Calificación y adherirse a las conclusiones del dictamen efectuado el 30 de noviembre del año 2017 por la IPS Universitaria.

Ahora, si bien en los alegatos de conclusión la accionada Colpensiones expuso, que solo tienen validez las valoraciones efectuadas por las Juntas respectivas, de aclararse que es válida la experticia traída por la parte, por el rigor científico expuesto, además de estar conforme los criterios del Decreto 1507 de 2014, y es una entidad competente para tal fin, conforme el artículo 4 del Decreto 1352 de 2013.

Pensión de invalidez:

Para la fecha de estructuración del estado invalidante de la demandante, es decir, para el 18/01/2017, debe revisarse el contenido del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 así:

“ARTÍCULO 39. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> *Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:*

Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración”

Conforme a la historia laboral aportada a la foliatura, se constata que el demandante cotizó la densidad mínima con suficiencia, 106.74 semanas en tres años anteriores al estado de invalidez, y, por tanto, le es procedente el reconocimiento y pago de la misma.

Ahora, respecto al retroactivo pensional, es claro, que el derecho a la pensión de invalidez se causa desde la estructuración del estado que imposibilita al trabajador a continuar auto solventándose económicamente, pues la naturaleza misma de la prestación es prever el beneficio económico a su favor, siendo, solo las incapacidades temporales, los únicos medios de exclusión de tal reconocimiento y no, las cotizaciones efectuadas como lo trató de hacer ver el recurrente. La estructuración, es entonces, el punto de partida de la prestación, y sin que se observe en el proceso que se haya realizado pago alguno por concepto de incapacidad al trabajador, (situación relevante de cara a la sentencia SL 5170 de 2021), deberá reconocerse la prestación a favor del señor Darío de Jesús Diosa Muñoz desde el 18 de enero del año 2017, como bien lo informó la *a quo*.

Las excepciones propuestas por Colpensiones, y revisadas en sede de Consulta, no tienen mérito de prosperidad, pues la prescripción en estos asuntos debe estudiarse desde la fecha del dictamen, y salta a la vista que entre la valoración del 30 de

noviembre del año 2017 y la presentación de la demanda el 9 de febrero del año 2018, no alcanzó a transcurrir el espacio temporal establecido en el artículo 151 del CPT Y SS, por lo cual, ninguna mesada pensional se encuentra afectada por el fenómeno extintivo.

Verificado el retroactivo liquidado por el despacho, y la historia laboral, se encuentra que, en efecto la prestación debe reconocerse sobre el salario mínimo legal mensual vigente, empero, entre el 18 de enero del año 2018 y el mes de marzo del año 2020 inclusive el retroactivo pensional asciende a la suma de: \$32.727.344 y no, \$32.727.389 como se indicó por la *a quo*, así:

AÑO	MESADA	VALOR	TOTAL AÑO
2017	12	\$ 737.717	\$ 8.852.604
2018	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	3	\$ 877.803	\$ 2.633.409
			\$32.727.344

Se modificará, por tanto, el retroactivo ordenado y continuará en ese sentido, Colpensiones, pagando una mesada pensional en cuantía del salario mínimo legal al actor, mientras subsistan las causas que le dan origen a la prestación y sobre 13 mesadas pensionales.

Ahora, en efecto en el concepto de comité de conciliación allegado por la entidad antes de la audiencia del artículo 77 del CPT Y SS se deja ver que, mediante petición del 31 de mayo del año 2014, y bajo el radicado 2014_2524143, sin embargo, no se observa en el plenario el recibo de dicho valor, y de ser así, se recuerda, que desde la sentencia SL 9769-2014 la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia

cambió su posición al respecto indicando la procedencia de ambas con el fin de, amparar al afiliado de las contingencias, concepto reiterado en sentencias SL 3868 de 2021 y SL 2843 del 23/06/2021, Rad. 88688, M.P FERNANDO CASTILLO CADENA, y en 1416 del 20/03/2019, M.P JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN.

Conforme la sentencia SL 359 de 2021, se confirma la indexación del retroactivo ordenado.

Así las cosas, se **CONFIRMARÁ ÍNTEGRAMENTE** la decisión que se revisa en apelación y consulta, por las razones expuestas, modificando el valor del retroactivo pensional.

Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones ante la improsperidad del recurso de alzada en suma de \$1.160.000.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín.

SEGUNDA: Modificar el valor del retroactivo expuesto por la a quo en suma de \$32.727.344.

TERCERO: Costas a cargo de Colpensiones ante la improsperidad del recurso de alzada en suma de \$1.160.000.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9682a2cc2ba60bb15c75e52137246386cc2a0f27df1a40685c6b6e321ee68f8d**

Documento generado en 24/11/2023 01:08:19 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>